



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

REGISTRO N° 1644/24.4

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2024.

AUTOS y VISTOS:

Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por los jueces Gustavo M. Hornos -como Presidente-, Javier Carbajo y Diego G. Barroetaveña, asistidos por el secretario actuante, se reúne para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en la presente causa **CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8**, caratulada "**L [REDACTED] C [REDACTED], Elías José y otros s/recurso de casación**".

Y CONSIDERANDO:

El señor **juez Javier Carbajo** dijo:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad, con fecha 18 de octubre de 2024, resolvió: "**NO HACER LUGAR -de momento- a la solicitud de actualización de los montos de los embargos, por la suma de \$ 6.677.320.193,51, que fueran decretados contra los/las imputados/das: Elías José L [REDACTED], Rosalía Marta F [REDACTED] Eduardo Omar A [REDACTED], Graciela Liliana M [REDACTED], Carlos Alberto V [REDACTED], Juan José T [REDACTED], Carlos Pedro J [REDACTED], Lucía Angélica M [REDACTED], Antonio Gabriel DI C [REDACTED], Paola Gabriela DI C [REDACTED], Jorge Guillermo F [REDACTED], Elena C [REDACTED], Ramiro PÉREZ G [REDACTED] A [REDACTED] y José Claudio R [REDACTED]; conforme fuera peticionado por el Ministerio Público Fiscal y la querella de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.)...**".

II. Contra dicha decisión, interpuso recurso de casación el representante del Ministerio Público Fiscal, que fue



concedido por el tribunal de procedencia, el 13 de noviembre del año en curso.

III. El recurrente indicó que el temperamento adoptado frustraba la capacidad de las medidas cautelares aplicadas para asegurar el cumplimiento de los efectos pecuniarios de una eventual condena.

Remarcó que la imputación se componía por las figuras receptadas en los art. 126 y 303 inc. 1 del Código Penal, por lo que, en adición al decomiso, podrían proceder la reparación del daño causado a las víctimas, conforme al art. 28 de la ley 26.364, y la obligación de abonar una pena de multa de entre dos y diez veces del valor de las operaciones económicas realizadas.

Adujo que el tiempo transcurrido desde el dictado de la medida cautelar, la depreciación monetaria generada por la inflación y el actual estado de la causa, en el que existía probabilidad de que se dictara una sentencia condenatoria, tornaban necesaria la actualización pretendida.

Indicó que se verificaba la existencia de un gravamen de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, pues era posible que los imputados solicitaran el levantamiento de las inhabiliciones generales de bienes, o que ofrecieran elementos insuficientes para responder a los embargos, según el valor justipreciado al momento del dictado.

Consideró que la fundamentación dada era aparente y que el tribunal de procedencia incurrió en el vicio de arbitrariedad, afirmando que meritar el estadio procesal para adoptar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

decisión objetada, era una apreciación certera, pero que no bastaba para contradecir lo argüido por esa parte.

Indicó que, si bien la decisión que rechazó la actualización del embargo de Antonio Di C [REDACTED] del 10/4/24 no fue recurrida, se trataría de un caso diferente, pues allí la solicitud se había efectuado solo para ese imputado y tampoco se advertía un perjuicio, desde que el tribunal también resolvió no hacer lugar al levantamiento de la inhibición general de bienes que fuera solicitado por el aquel imputado.

Agregó que en esa resolución, el tribunal había aclarado que su criterio era provisorio, por estimar que la discusión sobre la actualización de los montos de embargo debía sustanciarse con todas las partes, de forma tal que sería incongruente desestimar lo pretendido bajo el pretexto de ya haber sido analizado.

Afirmó que los instrumentos internacionales que el tribunal citó, propiciaban un actuar opuesto al que en definitiva se siguió.

Formuló reserva del caso federal.

IV.a) Según lo ha reseñado el tribunal de procedencia, el Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio de Elías José L [REDACTED], Rosalía Marta F [REDACTED], Eduardo Omar A [REDACTED], Graciela Liliana M [REDACTED], Carlos Alberto V [REDACTED], Juan José T [REDACTED], Carlos Pedro J [REDACTED], Lucía Angélica N [REDACTED], Antonio Gabriel Di C [REDACTED], Paola Gabriela Di C [REDACTED], Jorge Guillermo F [REDACTED], Elena C [REDACTED], Ramiro Pérez G [REDACTED] A [REDACTED] y José Claudio R [REDACTED] por la presunta comisión de las figuras receptadas en los



arts. 126 -excepto en el caso de Jorge Guillermo F [REDACTED]- y 303 inc. 1 del C.P.

b) En la incidencia en estudio, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se actualizaran los montos de los embargos dispuestos contra los nombrados al dictarse el auto de procesamiento, el 2/11/17.

Recordó que en esa decisión, la cuantía de la medida se delimitó en \$127.000.000 para cada imputado, pero que, en el presente, para mantener la capacidad del embargo de garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran surgir, debía darse una respuesta que no soslayara el contexto de desvalorización monetaria.

Pidió que como coeficiente se utilizara la tasa activa general, nominal y anual del Banco de la Nación Argentina para préstamos a treinta días. Bajo tal condición y meritando el lapso transcurrido desde el dictado de los embargos, concluyó que la suma debía de ser \$6.677.320.193,51.

A su turno, la querella conformada por la Unidad de Información Financiera (UIF) coincidió con los argumentos de la fiscalía y manifestó que era menester un nuevo análisis de suficiencia de los montos. Sostuvo que acoger esa pretensión implicaría una respuesta adecuada frente a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de resguardo y recupero de activos en casos de juzgamiento de maniobras de criminalidad compleja, como también priorizar la futura reparación de las víctimas. Postuló que, para arribar a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

cuantía adecuada, se utilizara el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,.

Al responder las vistas conferidas, las defensas de Antonio Gabriel Di C [REDACTED]; de Paola Di C [REDACTED], Elena C [REDACTED], Graciela M [REDACTED] y Rosalía F [REDACTED]; y de Jorge Guillermo F [REDACTED], hicieron saber su oposición.

La primera, adujo que se trataba de una cuestión que ya había sido resuelta por el tribunal en la causa CFP 14351/2010/TO3/3, el 10/4/24, ocasión en que se rechazó un pedido idéntico de la fiscalía respecto de Antonio Di C [REDACTED], no habiendo allí el Ministerio Público Fiscal recurrido la decisión.

Destacó que habían transcurrido escasos meses desde ese auto y que no se advertía qué circunstancias habían variado. Recordó que estaba en curso la realización de una pericia, afirmó que esa podría incidir sustancialmente en el desarrollo de la causa y alegó que "[h]oy no sabemos a ciencia cierta, cuál es la contabilidad que se cuestiona y de dónde surgen los importes que sustentaron la primigenia medida cautelar hoy vigente".

Señaló, finalmente, que había sido impuesta la inhibición general de bienes de los imputados, de modo tal que sus patrimonios estarían suficientemente cautelados.

La segunda defensa mencionada también memoró el resultado del incidente CFP 14351/2010/TO3/3, destacando que allí se tuvo en cuenta que estaba en curso la pericia contable, a la que se caracterizó como sumamente compleja y voluminosa.

Arguyó que, al disponerse la cifra del embargo, no se contempló una eventual obligación de resarcimiento a víctimas de



trata de personas, pues existía prueba informativa que indicaba que no se había configurado esa clase de ilícito.

Por último, la defensa de Jorge Guillermo F. [REDACTED] remarcó que no se encontraba imputado por ningún delito contra las personas y pidió que se tuviera presente tal circunstancia.

Al resolver, los jueces del tribunal de juicio refirieron que, de acuerdo con el art. 518 del C.P.P.N., el embargo y la inhibición general de bienes tenían como objeto evitar que los imputados se insolventaran o redujeran deliberadamente su patrimonio y así garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran sentenciarse.

Detallaron que la inhibición general de bienes era una medida de excepción, que suplía al embargo solo en los casos en los que se careciera, desconociera o resultaran insuficientes los bienes del sujeto pasivo y que se la debía dejar sin efecto si dicho cuadro de falta se revertía.

Señalaron que estaban en curso las medidas de instrucción suplementaria requeridas por las partes al ofrecer prueba y que, entre esas, se hallaba la pericia contable solicitada al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumentaron, que la cantidad de personas imputadas y el volumen de documentación que debía analizarse tornaban complejo el trámite respectivo, a la vez que, por la cantidad de medidas pedidas según el art. 357 del C.P.P.N., no podía tenerse a la tarea investigativa por agotada.

Adunaron que, en el incidente CFP 14351/2010/T03/3 ya se había resuelto un pedido de la fiscalía para que se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

actualizara el monto de embargo respecto de Antonio Gabriel Di C [REDACTED]; que allí se indicó que a raíz de las cuantiosas medidas de prueba solicitadas, la causa estaba transitando la etapa preliminar al debate conforme al art. 359 del C.P.P.N.; que también se consideró que lo pertinente era reinscribir las medidas cautelares ya impuestas; y que ninguna de las partes intervinientes impugnó el rechazo al pedido de actualización de los montos de embargo.

Consideraron que las circunstancias desde esa decisión no habían variado y concluyeron que de momento no debía hacerse lugar al pedido de la fiscalía.

III. Efectuada la reseña de antecedentes, debo destacar que la decisión recurrida no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr., entre otras, causas CFP 10580/2012/13/RH1, "Medina, Carlos A. s/queja", Reg. 62/15, del 18/2/2015; FLP 55007467/2013/2/RH1, "López Rivas, Darlo C. s/queja", Reg. 418/16, del 15/4/2016 y CFP 16441/2002/TO11/3/1/CFC56, "Rimoldi, Germán Ricardo s/recurso de casación", Reg. 316/23, del 29/3/23, todos de esta Sala IV).

Tampoco observo se haya acreditado en el caso la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que permita equiparar la decisión a definitiva, ni de un supuesto de arbitrariedad manifiesta, ni se ha precisado sobre la



configuración de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación *in re* "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108).

De conformidad con lo establecido por el art. 463 del C.P.P.N., la vía casatoria requiere de una fundamentación muy clara y concreta que permita mediante una argumentación razonada advertir palmariamente el error de interpretación o la falta de aplicación de la ley atribuidos al *a quo*, de qué manera ello incide en el resultado del juicio y cuál es la solución adecuada.

Es pertinente recordar además que el juicio sobre la admisibilidad formal del recurso intentado que realizó el tribunal de intervención previa, es de carácter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho extremo corresponde a esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y puede ser emitido sin pronunciarse sobre el fondo (cfr., en lo pertinente y aplicable, lo resuelto por esta Sala IV en FLP 24271/2016/CFC1, "Rodríguez, Omar Claudio y otra s/recurso de casación", Reg. 951/19.4, del 16/05/19; FLP 14695/2016/CFC1, "NN Gate Gourmets s/recurso de casación", Reg. 1792/21 del 20/10/21, FGR 14985/2017/TO1/21/1/CFC7, "Sánchez, Sergio Baldomero s/recurso de casación", Reg. 180/22 del 08/03/22; entre muchas otras).

La impugnación analizada se ha limitado a invocar defectos en lo decidido a partir de una discrepancia con la apreciación de las circunstancias concretas del caso que el *a quo* consideró dirimentes para su solución.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

El tribunal precedente realizó un análisis crítico de la situación puesta de resalto por el Ministerio Público Fiscal al instar su pretensión, de las particulares circunstancias de la causa y de la aplicación normativa resultante, arribando al rechazo de la solicitud de que los montos de los embargos fueran actualizados.

Bajo tal cuadro, advierto que la decisión impugnada se encuentra suficientemente sustentada, dado que presenta los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).

IV. Por ello, propongo al Acuerdo declarar inadmisibile el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas en esta instancia (arts. 530 y ss. del CPPN) y tener presente la reserva del caso federal.

Así voto.

El **señor juez Gustavo M. Hornos** dijo:

I. La cuestión bajo estudio merece una definición previa con relación a si puede ser discutida en esta sede y en esta oportunidad. Se trata de un filtro analítico que debe realizarse aun cuando, como en el caso, el recurso de casación interpuesto haya sido concedido por el tribunal anterior.

Así, comienzo por señalar, entonces, que el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, de esta ciudad, que no hizo lugar, de momento, a la solicitud de actualización de los montos de los embargos en autos, resulta



formalmente admisible.

Si bien en principio las decisiones atinentes a medidas cautelares -sea que las decreten, levanten o modifiquen- no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 313:116) y, en ese sentido, tampoco se encuentran comprendidas en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, las razones expresadas por el Ministerio Público Fiscal en su impugnación resultan razonables para tener por fundamentado que la decisión impugnada puede -conforme a la normativa supralegal invocada y frente a las particulares circunstancias del caso citadas- equipararse a un pronunciamiento de carácter definitivo en tanto sería susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior que torne ilusorios los fines resarcitorios que -también- tiene el proceso penal (cfr. en lo pertinente y aplicable doctrina de Fallos 318:514 y 328:1108 y de esta Sala IV: CFP 12099/1998/TO1/5/CFC2, Reg. 216/15.4 del 27/2/2015, FSM 6138/2020/7/RH1, Reg., 901/22.4 del 5/7/22 y recientemente FRO 37319/2022/3/RH2, Reg. 846/24.4 del 12/7/24 entre otros)

No puede olvidarse que el "lavado de dinero" es un delito organizado, transnacional y complejo.

En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado.

En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz-más aún cuando involucra la explotación de personas-, es fundamental (cfr. mi voto en causa "CHAVEZ, Ramón Alejandro y otro/recurso de casación" de esta Sala IV, reg. 2036.19, rta. el 10/10/2019, y causa CFP 14619/2007/TO3/4/CFC15 "TEGLI, Lorena Verónica s/recurso de casación", Reg. 764/2022, rta. el 14 de junio de 2022, "DORES, Oscar Emilio" ya citada, y causa "TAPIA, Claudio Fabian" reg. 642.4; rta. el 11/06/2024, entre varias otras.

No sólo el Código Procesal Penal de la Nación prevé el embargo de bienes de los procesados, o civilmente demandados, con la finalidad de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas (que abarcan el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa).

En efecto, el Estado Argentino, se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las Recomendaciones del GAFI. Estos compromisos refuerzan la obligación de extremar los



recaudos en medidas de resguardo como aquella cuya actualización es solicitada en autos.

En consecuencia, la determinación del monto del embargo debe guardar el mayor correlato posible para garantizar esos rubros, teniendo en cuenta que el artículo 23 del Código Penal autoriza al juez a adoptar las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso de todo bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso puede recaer (cfr.: mi voto en la causa CFP 4943/2016/19/CFC3:"LÓPEZ, Cristóbal Manuel y otros s/recurso de casación"; Reg. Nro. 314.18.1, rta. el 27 de abril de 2018).

Además, la normativa vigente, en particular el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, habilita la adopción de medidas cautelares destinadas a garantizar no sólo el decomiso sino también las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de una eventual sentencia condenatoria. Asimismo, los artículos 28 y 29 del Código Penal, junto con el artículo 28 de la Ley 26.364 (modificado por la Ley 27.508), disponen la obligación de reparar integralmente el daño causado a las víctimas, lo que incluye no solo la restitución económica sino también la indemnización civil y el pago de costas procesales (cfr. en lo pertinente mi voto en la causa "LONG SANSBERRO, Carlos y otros s/recurso de casación", reg. 1976/19.4 rta. el 3/10/2019)).

En este sentido, la parte ha planteado la necesidad actualizar el monto del embargo originalmente fijado en 2017,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
CFP 14351/2010/TO3/6/CFC8

considerando el contexto inflacionario que ha desvalorizado significativamente la moneda y podría comprometer la finalidad de la medida cautelar.

Además ha destacado que la actualización no solo busca conservar el poder efectivo de garantía del embargo, sino también prevenir su desnaturalización como herramienta procesal. A ello cabe resaltar la importancia de garantizar una suma que permita, en caso de recaer condena, satisfacer la pena pecuniaria, la reparación del daño a las víctimas, y el resguardo de los costos del proceso judicial.

Por otro lado, cabe notar la especial relevancia de los derechos fundamentales de las víctimas y la afectación a su plan de vida, aspectos contemplados en los artículos 29 del Código Penal y 28 de la Ley 26.364. La naturaleza reparadora de estas disposiciones reforzaría el carácter prioritario de salvaguardar los derechos de las víctimas mediante medidas cautelares adecuadas y actualizadas.

Sin perjuicio de lo expuesto, he conocido el sentido del voto de mis colegas quienes coinciden en declarar inadmisibile la vía intentada. Así las cosas, sellada como se encuentra la suerte del recurso de casación interpuesto, en virtud de su voto concordante, sólo habré de dejar a salvo mi opinión disidente en cuanto a que corresponde fijar la audiencia prevista en los arts. 465 bis, y 468 del C.P.P.N. y, eventualmente, ingresar al estudio de los agravios planteados por el recurrente.

El **señor juez Diego G. Barroetaveña** dijo:



Que por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones vertidas en el voto del colega que lidera el acuerdo y a fin de no extendernos en demasía sobre cuestiones que ya han sido objeto de un pormenorizado tratamiento en la mencionada ponencia, hemos de adherir a la solución propuesta por el señor juez Javier Carbajo.

Es nuestro voto.

Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:**

I. Declarar **INADMISIBLE** el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Diego G. Barroetaveña.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.

